



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Amparo del Socorro Raigosa
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-005-2021-00047-01
TEMA	Retroactivo pensional, prescripción, intereses moratorios
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia

El veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **015** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **AMPARO DEL SOCORRO RAIGOSA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-**, con radicado **05-001-31-05-005-2021-00047-01**.

• **PRETENSIONES**

Aspira la demandante se declare que le asiste derecho a la pensión de vejez desde que arribó a los 55 años de edad. Como consecuencia, solicitó el pago del retroactivo pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y/o la indexación.

• **HECHOS**

Las anteriores pretensiones se fundaron en los siguientes hechos: que cumplió 55 años de edad el 20 de febrero de 2004 y que era beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Que durante

toda su vida laboral efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones a través del entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Que en 2014 presentó ante la AFP la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante resolución GNR 437114 del mismo año, señalándose que no contaba con la densidad mínima de semanas. Que al no contar con conocimiento jurídicos y que a su vez realizó gestiones para que Colpensiones le corrigiera su historia laboral, continuó realizando aportes hasta el 29 de febrero de 2020. Que el 9 de marzo de ese mismo año 2020, solicitó nuevamente la prestación económica de vejez, siendo negada nuevamente a través de resolución SUB 93755 del mismo año por no contar con las semanas de ley; sin embargo, esta decisión se repuso a través de la resolución SUB 142818 de 2020, reconociéndose finalmente la pensión a partir del 1° de marzo de 2020 y no desde que causó la pensión.

- **CONTESTACIÓN**

Colpensiones: Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al considerar que no es posible reconocer un retroactivo pensional sin el retiro efectivo del sistema. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación de pagar el retroactivo pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, descuentos del retroactivo por salud, compensación y la genérica.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 14 de julio de 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín condenó a Colpensiones a pagar a la demandante por concepto de retroactivo pensional causado del 13 de junio de 2011 y el 29 de febrero de 2020 la suma de \$82.169.272, así como a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 desde el 13 de octubre de 2014 y hasta el momento efectivo del pago. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción. Las costas procesales se impusieron a cargo de Colpensiones.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandada Colpensiones, entidad que a través de su mandataria judicial la sustentó en los siguientes términos: que no está de acuerdo con el término señalado en relación con la excepción de prescripción, pues este debe demarcarse desde el 9 de marzo de 2020, fecha en la que la actora le reclamó nuevamente a la AFP la pensión de vejez, ya que la primera de las solicitudes fue presentada el 13 de junio de 2014, habiendo transcurrido más de tres años para reclamar la prestación. Que atendiendo a la modificación del retroactivo pensional, también se debe modificar la fecha a partir de la cual se reconocen los intereses moratorios, advirtiendo que estos se reconocen pasados 6 meses de haberse elevado la solicitud de pensión.

- **CONSULTA:**

Por ser la decisión adversa a los intereses de la demandada Colpensiones también será revisado el proceso en grado jurisdiccional de consulta.

- **ALEGATOS:**

Colpensiones: *“Por lo anterior, se determina que la efectividad otorgada mediante el Acto Administrativo SUB 142818 del 3 de julio de 2020, esto es, 1 de marzo de 2020; se encuentra ajustada a derecho, puesto que, evaluado el reporte de Historia Laboral, se evidenció que obra como última cotización efectiva en el Ciclo 20200201 de manera independiente, encontrándose ajustada a lo regulado en el art 13 decreto 758 de 1990. Para ello es preciso indicar que para efectos de definir la fecha de disfrute de la prestación se dio aplicación a las reglas de efectividad arriba citadas, y que para el caso que nos ocupa aplica: (...) B. Si el afiliado es dependiente y se encuentra retirado después de cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, la prestación se reconocerá a partir del día siguiente de la fecha de retiro. (...) Que, al validar la historia laboral, se tiene que en el periodo 2020-02 se reportó la novedad de retiro al 29 de febrero de 2020, de tal suerte que la prestación se reconoce al día siguiente de dicho reporte, esto es, 1 de marzo de 2020, en consecuencia no hay lugar a reconocimiento y pago de retroactivo alguno (...) Que, así las cosas, los intereses moratorios que solicita la recurrente contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser reconocidos y pagados cuando una vez reconocida la pensión no se paguen oportunamente las mesadas, situación que no se ha presentado en el caso bajo estudio porque la prestación no había sido reconocida y por tanto, no hay mora en el pago. Finalmente, y en lo atinente al*

recurso de apelación es claro señores magistrados que este proceso se vio afectado por el fenómeno de la prescripción contemplado en el artículo 488 del CST en el tema de la prescripción indica... “las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres años, que cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” pues la acá demandante pretende un retroactivo desde el año 2004 sin embargo es claro que la primera solicitud que elevo al demandante fue en el año 2014 y luego dejó transcurrir otros tres años pues volvió a solicitar la prestación en marzo de 2020 por lo que sin lugar a dudas en caso de una eventual condena esta excepción esta llamada a prosperar”

CONSIDERACIONES:

Señala la demandante, señora Amparo del Socorro Raigosa, que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez desde que arribó a los 55 años de edad, momento para el cual causó el derecho a tal prestación, advirtiendo que realizó cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones hasta el año 2020 debido a que Colpensiones le negó la pensión aduciendo que no acreditaba la densidad mínima de cotizaciones; por su parte la demandada defiende su decisión de haber reconocido la prestación desde marzo de 2020 atendiendo a que no es posible reconocer un retroactivo pensional sin el retiro efectivo del sistema; finalmente, el juzgado del conocimiento le da la razón a la parte activa, indicando que la pensión se reconoce desde el 13 de junio de 2011 al encontrarse demostrado que a esta se le indujo en error por parte la AFP, lo que dio lugar a que continuara realizando cotizaciones adicionales, aun cuando ya había causado el derecho a la prestación.

Conforme a la apelación formulada por Colpensiones y a que la sentencia también será revisada en grado de Consulta, los problemas jurídicos para resolver por esta Sala serán los siguientes: **i)** si la demandante tiene derecho o no al retroactivo pensional por inducción en error de la entidad accionada; **ii)** excepción de prescripción; **iii)** procedencia de los intereses moratorios; y, **iv)** Costas procesales.

i. Retroactivo pensional – inducción en error

Por considerar haber causado el derecho a la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición bajo los postulados del decreto 758 de 1990 y haber acreditado más de 500 semanas de cotización dentro de los 20

años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, le solicitó a Colpensiones el 13 de junio de 2014 el reconocimiento de tal prestación; sin embargo, esta le fue negada a través de la resolución GNR 437114 del 23 de diciembre de 2014, al considerar la AFP *“Que en consideración a lo anterior, el(a) peticionario(a) no logra acreditar los requisitos mínimos de edad y/o semanas cotizadas, razón por la cual se niega la prestación solicitada”*

El 9 de marzo de 2020 la actora radica una nueva solicitud ante Colpensiones buscando el reconocimiento de su pensión de vejez, la cual también le fue negada a través de resolución SUB 93755 del 17 de abril de 2020; no obstante, por resolución SUB 142818 del 3 de julio del mismo año, la AFP revocó la decisión anterior, y en su lugar le reconoció la prestación de vejez como beneficiaria del régimen de transición desde el 1° de marzo de 2020, en cuantía del salario mínimo legales mensual.

Para resolver el primer problema planteado, esto es, lo relacionado con la inducción en error por parte de la demandada, se hace necesario establecer en qué momento la accionante causó el derecho a la pensión de vejez.

Se tiene entonces que la demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, atendiendo que para el 1° de abril de 1994 acreditaba más de 35 años de edad, ya que nació el 20 de febrero de 1949. Es así que a la actora le es aplicable el decreto 758 de 1990, en el cual, el derecho a la pensión de vejez se causa una vez el afiliado, en este caso mujer, cumpla 55 o más años de edad y cuente con un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o que acredite un número de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

En el presente asunto es importante precisar que la señora Raigosa, desde el mismo momento en que elevó la primera solicitud de pensión (13 de junio de 2014), cumplía a cabalidad con el lleno de los requisitos de ley para causar la misma, toda vez que para dicha fecha contaba con 532.89 semanas cotizadas, cumpliendo con el requisito de las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (20 de febrero de 1984 al mismo día y mes de 2004), así como los 55 años de edad. Por haberse causado la pensión en el año 2004, a la demandante no se le extienden las exigencias de que trata el acto legislativo 001 de 2005 con relación al régimen de transición.

Ahora, en cuanto a la **INDUCCIÓN EN ERROR**, manifestada por la activa que la pensión se debe reconocer desde que causó esta; sin embargo, por regla general para el disfrute de la pensión de vejez es necesaria la desafiliación del sistema, tal y como lo advierte Colpensiones, esto es, que conforme lo establecido en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 que mantuvieron vigencia luego de la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, por así establecerlo el artículo 31 ibídem cuando indicó que se mantienen vigentes las disposiciones regulatorias de los seguros de invalidez, vejez y muerte administrados por el Instituto en aquellos aspectos inherentes a esas prestaciones; no obstante, la jurisprudencia ha identificado casos en que la aplicación exegética de la norma no resulta ser la adecuada, siendo de trascendencia el denominado retiro tácito y la inducción en error.

En lo que se refiere al error, esta se describe como una equivocada o inexacta creencia o representación de la realidad jurídica o material, que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. En materia pensional la jurisprudencia especializada le ha atribuido consecuencias en el evento en que el afiliado, no obstante haber causado la prestación por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios y solicitado su reconocimiento en forma oportuna, se ha visto obligado a seguir cotizando debido a una conducta negligente al momento de estudiar la procedencia del derecho o negarlo aduciendo el déficit de aportes.

La sentencia antecesora dentro de esta línea es la radicado 34514 del 1° de septiembre de 2009, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al conocer el caso de una persona que solicitó la pensión de vejez cumpliendo con los requisitos, sin embargo, esta le fue negada por el ISS por no contar con el número suficiente de semanas, lo que llevó al demandante a vincularse al sistema efectuando nuevas cotizaciones; una posterior reclamación dio cuenta de que el demandante causó la prestación desde el primer momento negando el pago del retroactivo por existir cotizaciones posteriores, actuación desestimada por la Corte bajo el entendido que la negligencia del ISS no podía beneficiarlo en detrimento del afiliado. Tesis reiterada en la Sentencias radicados 39391 del 22 de febrero de 2011, 38558 del 6 de julio de 2011, 37798 del 15 de mayo de 2012, 44987 del 11 de mayo de 2016 y SL4540-2021.

De la línea jurisprudencial citada se destacan los siguientes aspectos: (i) Debe existir una manifestación del afiliado tendiente al disfrute de la pensión de vejez, (ii) Debe haber un actuar negligente o errada de la AFP encargada de reconocer la pensión, que lleve al afiliado a seguir efectuando cotizaciones.

En el presente caso, para esta Sala de Decisión es claro que se cumplen los presupuestos necesarios para afirmar que se presentó inducción en error como pasa a exponerse:

1. La demandante con la reclamación presentada el 13 de junio de 2014, manifestó de manera expresa su voluntad de disfrutar de la pensión bajo los parámetros del decreto 758 de 1990.
2. La entidad negó la pensión de vejez aduciendo que *“Que en consideración a lo anterior, el(a) petitioner(a) no logra acreditar los requisitos mínimos de edad y/o semanas cotizadas, razón por la cual se niega la prestación solicitada”*, desconociendo que para tal momento se encontraba causada la prestación.
3. Debido a esta negativa, la señora Raigosa se vio obligada a seguir cotizando, pues así se desprende de la historia laboral aportada con la demanda, lo que la llevó a solicitar nuevamente en el año 2020 el reconocimiento de la pensión, la que finalmente fue concedida conforme al régimen de transición.

En esas condiciones, se observa que la entidad si generó la inducción en error de la actora, ya que es evidente su desacierto y el actuar negligente, pues si bien en la resolución GNR 437114 de 2014 que negó inicialmente la pensión se le indicó que no cumplía con los requisitos de ley, no existe en tal sentido causa jurídica o razón probable para que la demandante siguiera efectuando cotizaciones adicionales para alcanzar un derecho al que ya se le han satisfecho con creces sus requisitos, generando un conocimiento equivocado. Criterio este último advertido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia originaria del 1° septiembre de 2009 con radicado 34514.

Ahora bien, con relación a la fecha a partir de la cual debe reconocerse el retroactivo pensional, es necesario aclarar, contrario a lo indicado por el

juzgado del conocimiento, que en el caso particular el error en el que se indujo a la afiliada data desde que esta arribó a los 55 años de edad. Y es que la señora Raigosa, si bien causó el derecho a la pensión el 20 de febrero de 2004, fue su voluntad la de seguir realizando aportes a pensión, voluntad que se extendió hasta el momento en que le fue notificada la resolución GNR 437114 del 23 de diciembre 2014 que le negó inicialmente la prestación económica.

No puede considerarse entonces que aquellas cotizaciones realizadas de manera voluntaria desde el año 2004 hasta diciembre de 2014 se realizaron con ocasión a un error inducido por Colpensiones, pues debe destacarse que solo hasta tanto se le notificó la resolución mencionada, por la cual se le niega la prestación, se entiende que hubo una información erradamente a la actora que no cumplía con los requisitos de ley para causar la pensión, inducción que dio lugar a que esta continuara realizando las cotizaciones.

Así las cosas, es acertada la decisión del juzgado del conocimiento con relacional a la inducción en error, sin embargo, se aclara que tal hecho solo dio lugar el 13 de enero de 2015, fecha en que se le notificó a la señora Amparo del Socorro Raigosa la multicitada resolución GNR 437114 del 23 de diciembre 2014, según se desprende del acta de notificación visible en el documento denominado “GEN-RES-CO-2015_226502-20150113022327” que hace parte del documento digital “13. EXP. ADMINISTRATIVO COLPENSIONES” del expediente.

ii. Excepción de prescripción

En lo que respecta a la **EXCEPCIÓN PRESCRIPCIÓN** propuesta por la demandada, no se discute que la primera solicitud de pensión fue elevada por la actora el 13 de junio de 2014, siendo negado el derecho mediante resolución GNR 437114 del mismo año.

Respecto a lo anterior, hace imposible al Tribunal declarar próspera la excepción de prescripción, aun cuando el transcurrir del tiempo pudo extinguir, así sea de manera parcial un derecho o parte de la obligación; ello obedece a la inducción en error que le fue producida a la demandante, toda vez que no puede premiarse una conducta antijurídica de quien induce o mantiene al otro en error, ya que en estos casos el término de prescripción solo comienza a

contarse una vez desaparezcan las causas que motivaron el error, y en el caso objeto de estudio, la inducción en error cesó con la notificación de la resolución SUB 142818 del 3 de julio de 2020, por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez a partir del 1° de marzo del mismo año, viéndose como consecuencia obligada la actora a presentar la demanda el 5 de febrero de 2021, es decir, dentro del término trienal de prescripción de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Atendiendo a lo dicho, es procedente condenar a la demandada a pagar a la actora el retroactivo de la pensión de vejez causado del 13 de enero de 2015 al 29 de febrero de 2020 la suma de **\$53.030.172**, teniendo en cuenta una mesada pensional del salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, a razón de 14 mesadas al año. Esto último se debe a que la pensión se causó, se repite, con anterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 que condicionó el reconocimiento a 13 mesadas anuales.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	13,6	\$ 644.350	\$ 8.763.160
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	2	\$ 877.803	\$ 1.755.606
			TOTAL	\$ 53.030.172

Es necesario denotar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 143 de la ley 100 de 1993, la cotización para salud de los pensionados se encuentra en su totalidad a cargo de aquéllos, quienes son afiliados obligatorios a este sistema en el régimen contributivo, tal como lo determina la misma ley en el artículo 157 y 203. Por tal razón, se es procedente la autorización de los descuentos en salud ordenado por el juzgado de instancia sobre las mesadas pensionales ordinarias reconocidas.

iii. Intereses moratorios.

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios, es claro que estos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo por la obligación que

tiene la entidad de seguridad que estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cancele de manera oportuna, así lo prevé el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Y para esto, la ley estableció un término para darle respuesta a la solicitud elevada por el accionante, la cual se encuentra consagrada en el inciso final del párrafo 1°, del artículo 9° de la ley 797 de 2003, que señala el término a partir del cual comienza a generarse la mora, el cual es al día siguiente al vencimiento del último día de los 4 meses que confiere la ley para resolver la solicitud

Es ineludible advertir que, si bien en ciertos casos no es factible imponer intereses moratorios, esta condena no está sometida a un análisis de la conducta de la entidad y su posible apego a los supuestos de la buena fe, sino a situaciones excepcionales y puntuales como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3785-2020, en donde indicó que *“...la Corte también ha reconocido que existen algunos escenarios excepcionales y muy precisos en los que no se puede asumir que la entidad administradora de pensiones esté en mora de pagar las prestaciones que están a su cargo, bien porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas (ver CSJ SL6326-2016, CSJ SL8552-2016, CSJ SL4948-2017, CSJ SL072-2018 y CSJ SL984-2019) o porque existe algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria (CSJ SL704-2013, CSJ SL13369-2014, CSJ SL14528-2014, CSJ SL11940-2017, CSJ SL1354-2019 y CSJ SL2239-2019, entre otras)”*; de acuerdo a ello, debe indicarse que en el caso objeto de estudio no se presenta ninguna de las anteriores figuras, por tal razón, son procedentes los mismos.

Si bien la solicitud del reconocimiento pensional fue presentada ante la AFP 13 de junio de 2014, esta solo se reconoce a partir del 13 de enero de 2015 por las razones antes advertidas, esto es 7 meses después, superándose el término de que trata el párrafo 1°, del artículo 9° de la ley 797 de 2003, antes citado. Por tales razones, los intereses moratorios correrán desde el 1° de febrero de 2015, momento para el cual se encontraba en mora la mesada causada de enero de ese mismo año. Procede en consecuencia los mencionados intereses sobre las mesadas adeudadas y hasta que se satisfaga la obligación.

En lo que respecta a la forma de liquidación de los intereses moratorios, el artículo 141 de la ley 100 de 1993, dispone que los mismos se liquidan al momento del pago de las mesadas pensionales atrasadas, con *“la tasa máxima*

de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”, por lo tanto, para estimar el valor de los mismos, debe tenerse en cuenta cada una de las mesadas adeudadas desde la fecha de su exigibilidad, liquidando mes a mes hasta la fecha del pago.

Por último respecto a este tema, debe insistirse que los intereses moratorios son un resarcimiento ante el retardo injustificado en el pago de las mesadas pensionales que se reconocen con sujeción a la referida ley 100, y por ende en el presente caso es aceptado imponerlos, sin que sea de recibo el término de 6 meses para decidir la prestación, pues este último límite se encuentra establecido en el artículo 4° de la ley 700 de 2001 tan solo para que la entidad de seguridad social incluya en nómina al pensionado, más no para su reconocimiento.

Por lo anterior, se deberá **MODIFICAR** la sentencia de primera instancia en tal sentido.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Colpensiones.

iv. Costas procesales.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por Colpensiones, son de su cargo y en favor de la demandante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** el numeral primero de la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta. En su lugar se declara que la demandante Amparo del Socorro Raigosa le asiste derecho al reconocimiento del retroactivo pensional causado del 13 de enero de 2015 al 29 de febrero de 2020.

SEGUNDO: Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia. En su lugar, el retroactivo pensional asciende a **\$53.030.172**.

TERCERO: Se **MODIFICA** el numeral tercero de la sentencia. En su lugar se condena al reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir del 1° de febrero de 2015 sobre las mesadas adeudadas objeto de esta providencia y hasta que se satisfaga la obligación.

CUARTO: Se **REVOCA** el numeral cuarto de la sentencia.

QUINTO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

SEXTO: Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Rdo. 05-001-31-05-005-2021-00047-01
SA 192-22

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sharp angles, positioned above the printed name.

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Amparo del Socorro Raigosa
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-005-2021-00047-01
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 23 de febrero de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 23 de febrero de 2023 a la 5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO